plaza pública para la edición del 25 de junio de 1992

% Luz Elena Picos

% ¡Callen a esa vieja!

miguel ángel granados chapa

Mañana, Luz Elena Picos no se moverá del flamante Palacio federal de Justicia hasta que se resuelva el extraño juicio de amparo iniciado por el sindicato de la radio y la televisión contra el laudo que, en beneficio de la periodista y locutora, en realidad significó un raro apoyo legal a las libertades de expresión y de trabajo.

El 11 de julio de 1989 Luz Elena Picos fue suspendida de su emisión radiofónica en la XX de Tijuana. Había concluido poco antes la campaña electoral en que triunfó Acción Nacional, y el PRI ajustaba cuentas. El comité local del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión (STIRT) avisó a la emisora que la periodista debía salir de las emisiones a su cargo, por sus "comentarios contrarios a nuestra ideología". Dos semanas atrás, al calor de la contienda política, dos locutores más habían recibido sentencia semejante.

La periodista --nacida en Mazatlán, pero radicada desde 1949 en Tijuana, con un intervalo en la ciudad de México--, resolvió iniciar una lucha contra el silencio que se le imponía. Si bien ya entonces era articulista regular del semanario Zeta, que también surgió de una convicción periodística libertaria, y tan influyente es hoy en la frontera, no quiso que el STIRT consagrara, en su perjuicio, el papel de censor, desvirtuando el que legítimamente le corresponde promover el derecho de sus miembros. Aparte la lucha política para crear conciencia en torno de la gravedad de aquella determinación, Luz Elena Picos inició un juicio laboral, que después de muchos escollos fue resuelto en su favor por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en diciembre pasado. En año y medio su querrela se había llenado de tantos episodios, que pudo con ellos integrar un libro cuyo título resume la consigna dictada en su contra: *¡Callen a esa vieja!*.

El laudo obligaba a la empresa, Operadora de Radio y TV, a reinstalarla y a cubrirle los salarios caídos. A instancias del STIRT, la parte patronal solicitó amparo contra la decisión del tribunal laboral, y a sus pretensiones se agregó el propio sindicato, como tercero perjudicado. El juicio fue turnado al sexto tribunal colegiado del primer circuito en materia del trabajo, cuya secretaría lo listó el 27 de abril, por lo que poco después debió ser resuelto. Estamos ya a fines de junio y la audiencia constitucional apenas se efectuará mañana.

Por la absurda centralización, derivada del carácter del contrato ley de la industria de radio y televisión, los

procesos laboral y constitucional de un asunto surgido en Tijuana se resuelven en la ciudad de México. La protagonista del episodio ha tenido que permanecer aquí, con perjuicio a sus ocupaciones como directora de la revista radiofónica *Vida plena*, y mañana viernes se instalará a las puertas del tribunal hasta que su caso concluya, al menos en esta fase. Es seguro que muchas personas que a lo largo del tiempo han conocido su caso, y son partidarias de la expresión libre, y de la lucha de una mujer decidida, la acompañarán en su espera, en las modernas instalaciones del Palacio de Justicia, cerca de la estación San Lázaro.

Ya la acompañó, al escribir el prólogo de su libro, el antiguo candidato del PAN a la presidencia de la República y jefe nacional de ese partido, don Efraín González Morfín. En una de sus insólitas y por ello aun mejor valuadas apariciones en público (pues decidió retirarse de la política activa y de la expresión pública, a modo de muda protesta) González Morfín dice en ese texto:

"Este libro de Luz Elena Picos es un testimonio veraz y valiente de lo que ha sucedido a la autora por ejercer y defender el derecho a decir la verdad, incluso en materia política, a través del trabajo responsable en el radio y en la prensa. La objetividad de la denuncia se apoya en el anuncio y el testimonio de los valores fundamentales: verdad y veracidad, sobre todo en los medios de comunicación social; exigencia de respeto a la libertad de expresión democrática y al deber y derecho de trabajar. Además, tiene valor ejemplar destacado, sobre todo en nuestro ambiente, la actitud de una mujer que lucha contra la aceptación sumisa de la discriminación y la injusticia".

El 11 de julio de 1989 Luz Elena Picos fue suspendida de su emisión radiofónica en la XX de Tijuana. Había concluido poco antes la campaña electoral en que triunfó Acción Nacional, y el PRI ajustaba cuentas. El comité local del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión (STIRT) avisó a la emisora que la periodista debía salir de las emisiones a su cargo por sus "comentarios contrarios a nuestra ideología". Dos semanas atrás, al calor de la contienda política, dos locutores más habían recibido sentencia semejante.

La periodista —nacida en Mazatlán, pero radicada desde 1949 en Tijuana, con un intervalo en la ciudad de México— resolvió iniciar una lucha contra el silencio que se le imponía. Si bien ya entonces era articulista regular del semanario *Zeta*, que también surgió de una convicción periodística libertaria, y tan influyente es hoy en la frontera, no quiso que el

STIRT consagrara, en su perjuicio, el papel de censor, desvirtuando el que legítimamente le corresponde promover, el derecho de sus miembros. Aparte la lucha política para crear conciencia en torno de la gravedad de aquella determinación, Luz Elena Picos inició un juicio laboral, que después de muchos escollos fue resuelto en su favor por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en diciembre pasado. En año y medio su querrela se había llenado de tantos episodios, que pudo con ellos integrar un libro cuyo título resume la consigna dictada en su contra: *¡Callen a esa vieja!*

El laudo obligaba a la empresa, Operadora de Radio y Televisión, a reinstalarla y a cubrirle los salarios caídos. A instancias del STIRT, la parte patronal solicitó amparo contra la decisión del tribunal laboral, y a sus pretensiones se agregó el propio sindicato, como tercero perjudicado. El juicio fue turnado al sexto tribunal colegiado del primer circuito en materia del trabajo, cuya secretaría lo

listó el 27 de abril, por lo que poco después debió ser resuelto. Estamos ya a fines de junio y la audiencia constitucional apenas se efectuará mañana.

Por la absurda centralización, derivada del carácter del contrato ley de la industria de radio y televisión, los procesos laboral y constitucional de un asunto surgido en Tijuana se resuelven en la ciudad de México. La protagonista del episodio ha tenido que permanecer aquí, con perjuicio a sus ocupaciones como directora de la revista radiofónica *Vida Plena*, y mañana viernes se instalará a las puertas del tribunal hasta que su caso concluya, al menos en esta fase. Es seguro que muchas personas que a lo largo del tiempo han conocido su caso, y son partidarias de la expresión libre, y de la lucha de una mujer decidida, la acompañarán en su espera, en las modernas instalaciones del Palacio de Justicia, cerca de la estación San Lázaro.

Ya la acompañó, al escribir el prólogo de su libro, el antiguo candidato del PAN

a la Presidencia de la República y jefe nacional de ese partido, don Efraín González Morfín. En una de sus insólitas y por ello aun mejor valuadas apariciones en público (pues decidió retirarse de la política activa y de la expresión pública, a modo de muda protesta), González Morfín dice en ese texto:

"Este libro de Luz Elena Picos es un testimonio veraz y valiente de lo que ha sucedido a la autora por ejercer y defender el derecho a decir la verdad, incluso en materia política, a través del trabajo responsable en la radio y en la prensa. La objetividad de la denuncia se apoya en el anuncio y el testimonio de los fundamentales: verdad y veracidad, sobre todo en los medios de comunicación social; exigencia de respeto a la libertad de expresión democrática y al deber y derecho de trabajar. Además, tiene valor ejemplar destacado, sobre todo en nuestro ambiente, la actitud de una mujer que lucha contra la aceptación sumisa de la discriminación y la injusticia".

real, cuya organización sea de abajo hacia arriba”.

Añadió que este planteamiento de su partido obedece a que “hay mucho pueblo que está luchando en las colonias populares, en los barrios, en las comunidades por mejorar sus condiciones de vida, pero lo están haciendo al margen de sus partidos”. Este segmento de la población, insistió, se organiza como puede, “por esa sabiduría popular, ese instinto, por ese afán de sumar fuerzas para poder lograr un objetivo común”, ello obedece a que las estructuras de atención no son eficaces ni suficientes”.

Afirmó que “se trata realmente de un proceso social de organización de base, con el fin de que el PRI sume pueblo al partido y abandere las luchas populares de hoy, no de ayer”.

Borrego advirtió que en el proceso de urbanización del país y el dinamismo con el que ha cambiado la sociedad mexicana en la última década es tal, que si el PRI

Acusado de introducir armas para *La Quina*; piden su extradición

Detienen a José Cruz Contreras, en Texas

A petición del gobierno mexicano, el servicio de *marshalls* de Texas detuvo a José Cruz Contreras en Corpus Christi con miras a extraditarlo para ser juzgado por su presunta responsabilidad en los delitos de acopio de armas, introducción clandestina de armas de fuego y administración fraudulenta, todos ellos relacionados con el proceso que se le sigue a Joaquín Hernández Galicia *La Quina*.

A Cruz Contreras lo requirieron dos jueces mexicanos, el octavo y el 17 de distrito en materia penal de la ciudad de México, donde se le instruyen los procesos 13/89 y 107/90, respectivamente.

Según una notificación de la agregaduría regional de la Procuraduría General de la República (PGR) en el

consulado de México en Corpus Christi, en los próximos días el gobierno mexicano formalizará por la vía diplomática la petición de extradición del inculcado; en tanto, Cruz Contreras será presentado ante la corte federal de Estados Unidos en McAllen, Texas, para iniciar el procedimiento de extradición.

El inculcado, junto con Juan Abrego, fue quien presuntamente en noviembre de 1988 se encargó de la compra e introducción de 50 ametralladoras mini *Uzi* calibre 0.9 milímetros para *La Quina*. Más adelante, en diciembre de ese mismo año, ambos —apoyados por otras dos personas no identificadas— volvieron a introducir ilegalmente otro cargamento de 205 ametralladoras *Uzi* y mini *Uzi*, así como 25 mil cartuchos para dichas armas. Por su parte, Abrego era *sheriff* de

Hidalgo, Texas, y resultó ser sobrino de Juan Nepomuceno Guerra.

Por lo que se refiere al delito de administración fraudulenta, al parecer Cruz Contreras aprovechó su carácter de administrador y apoderado de la Comisión de Contratos del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para utilizar en su beneficio personal —durante 1987 y 1988— más de 17 mil 500 millones de pesos, que debían haberse destinado a la realización de obras y mantenimiento de las plataformas petroleras marítimas ubicadas en la sonda de Campeche, utilizando facturas apócrifas.

De igual forma, es acusado de haberse apoderado de más de 500 mil dólares de una cuenta de inversión bancaria depositada en Bancomer.